

NUESTRA AMÉRICA

RESISTENCIAS, ALTERNATIVAS Y OFENSIVA IMPERIAL. CLAVES PARA LA COYUNTURA ACTUAL

*Julietta Minervini**

“Si alguna vez hubo en la historia de la humanidad un enemigo que es verdaderamente universal, un enemigo cuyos actos mueve problemas para todo el mundo, pone en peligro al mundo entero, ataque a todo el mundo, de una forma o de otra, y que ese enemigo sea verdaderamente universal, ese enemigo es precisamente el imperialismo yanqui.”

Fidel Castro

EL MAPA ACTUAL

El mapa político latinoamericano se ha caracterizado, en la última década, por una extraordinaria fluidez. La actual coyuntura está atravesada por diversos intentos, por parte de los EE.UU., de recuperar la iniciativa en la región frente a las resistencias populares y el surgimiento de gobiernos independientes y bloques regionales. Estamos viviendo, en definitiva, un período de agudización de las contradicciones estructurales, de tensiones en la correlación de fuerzas entre los países oprimidos que se empiezan a organizar y el imperialismo y sus gobiernos aliados. Reflexionar sobre este tema va a ser el propósito del presente trabajo.

Si acercamos un poco la lupa, vemos con claridad que la situación es sumamente compleja. Es que al accionar estadounidense delineando planes político-económicos para América Latina -lo que a esta altura ya es una constante- se ha venido a sumar la emergencia de alternativas regionales a este dominio histórico. Nos referimos, por un lado, al proyecto de Socialismo del Siglo XXI que impulsa el gobierno de Venezuela y a la creación del Estado Plurinacional en Bolivia; y por el otro, a diversas iniciativas protagonizadas por estados latinoamericanos

* Estudiante de historia y militante del Colectivo de Izquierda (FFyL - UBA)

que, sin plantear una agenda antiimperialista, buscan consolidar ciertos márgenes de autonomía respecto de la potencia hegemónica.

En el primer caso se trata de procesos de cambio de fundamental importancia, ya que es a partir de allí que se han potenciado nuevas formas de resistencia en las calles, resistencias que vienen a oponerse a la hegemonía del Norte en la región y que, a un tiempo, van encontrado su correlato también en la esfera institucional. Esto se expresa en marcos nacionales, donde la lucha social ha arribado a provisoria síntesis político-estatales (Bolivia y Venezuela), pero también a nivel regional en la construcción del ALBA, bloque de unidad continental opuesto por el vértice la lógica del ya fenecido ALCA y de los TLCs. Estos procesos no expresan “giros políticos” casuales de algún gobernante díscolo, sino que se enmarcan, y son resultado, de un proceso más general que tiene como componente fundamental el avance organizativo de los sectores subalternos desde fines de la década del ‘90. Es frente a este avance político-social de nuestros pueblos, y a la influencia que los procesos más avanzados pueden ejercer sobre el conjunto, que el imperialismo norteamericano busca relanzar su ofensiva en la región.

La segunda característica del escenario latinoamericano se vincula al desarrollo de bloques regionales, con expresiones tanto políticas como comerciales, que se han fortalecido luego del mencionado derrumbe del ALCA. A diferencia del ALBA estos espacios, particularmente el MERCOSUR y UNASUR, expresan proyectos alternativos de integración capitalista, que pueden suponer enfrentamientos y tensiones con demandas coyunturales de los EE.UU. sin por eso ser estratégicamente incompatibles con sus intereses en la región. En estos ámbitos participan también los gobiernos del ALBA, pero el rol protagónico recae sobre dos países que vienen desarrollando una activa política exterior: Argentina y fundamentalmente Brasil. El papel sub-imperialista de éste último, que ha sido remarcado por muchos analistas, le exige sostener niveles apreciables de autonomía respecto de norteamérica y Europa, al mismo tiempo que presentarse como un estabilizador regional. De ahí que el gobierno de Lula haya enfrentado las políticas imperialistas más agresivas (y a los gobiernos proclives a apoyarlas), al mismo tiempo que hace un trabajo de contención frente a los gobiernos más radicales del continente. Esta función como garante en última instancia de la estabilidad regional no puede ser disputada por Argentina, con evidentes inferioridades en cuanto a peso económico, político y demográfico. Sin embargo, el gobierno argentino mantiene una política exterior muy activa, siendo animador principal, junto a

su socio/competidor, de la UNASUR y sosteniendo una alta exposición en conflictos regionales como los de Colombia con Ecuador, y ahora con Venezuela, la liberación de los “rehenes” de las FARC y el golpe de Estado en Honduras.

Frente a esta realidad estamos presenciando un intento de los EE.UU. por recuperar protagonismo en lo que siempre ha sido su patio trasero. Por un lado encontramos un lento pero persistente fortalecimiento de posiciones pro-imperialistas entre los gobiernos que forman el denominado cordón del Pacífico -Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, México- junto a Colombia, el Salvador y Guatemala. Fueron estos países los que, por caso, se posicionaron al lado de EE.UU al petitionar el reingreso de Honduras a la OEA, solicitud que tuvo lugar en el marco de la 40ª Asamblea general del organismo, mientras se instalaba en este país el gobierno post-golpista de Porfirio Lobo. Se trataba, como salta a la vista, de una maniobra proclive a legitimar las consecuencias del golpe de Estado perpetrado contra el gobierno de Zelaya. Sin embargo, vemos, por otro lado, que la injerencia imperialista en América Latina excede en mucho el aleccionador ejemplo hondureño. La mayor manifestación de esta ofensiva es, tal vez, la instalación de las siete bases militares norteamericanas en tierras colombianas, surgidas de un acuerdo que selló Álvaro Uribe Vélez con el gobierno de Bush, y que contempla el establecimiento de cientos de soldados y contratistas norteamericanos en aquellas instalaciones. Este hecho no sólo impacta directamente sobre la situación social y política al interior de Colombia, fortaleciendo la orientación militarista de su Estado, sino que tiene serias implicancias para el conjunto del continente. Siete nuevas bases bajo control norteamericano significan una evidente avanzada militar sobre Sudamérica, conformando en última instancia una amenaza para los sectores populares y sus luchas por la transformación social. Pero la lista no acaba aquí: desembarco de marines en Costa Rica, violación constante del espacio aéreo venezolano por parte de la aviación norteamericana, acciones militares de control en Puerto Rico y, claro, la ocupación militar de Haití apenas ocurrido el terremoto. Nos encontramos, pues, frente a elementos que si a primera vista parecen aislados, fácilmente podemos comenzar a poner en relación. Y es esto último lo que torna la situación de una gran gravedad.

Ahora bien, se hace necesario comenzar a explicar más en detalle este proceso. Lo que podemos observar es que, por lo menos parte de estas acciones, parecen encaminadas a resolver uno de los puntos principales de la agenda de relaciones exteriores de EE UU: neutralizar

la influencia de Chávez en la región, promoviendo como alternativa el fortalecimiento del eje de países con gobiernos adictos a Washington.

URIBE VÉLEZ, EL PEÓN

Sidurante la década del '70 la política imperialista hacia Latinoamérica se centró en la instauración de gobiernos de facto a través de golpes militares, la coyuntura actual parece mostrar una diversificación en los recursos empleados, que va desde la ocupación de hecho hasta la presión diplomática. Cuestiones de forma aparte -aunque no sean menores, ya que determinan la naturaleza del conflicto- el objetivo se mantiene. Durante junio-agosto pasado presenciábamos un muestrario detallado de esta política. Nos referimos a la denuncia que realizó Colombia contra Venezuela ante la OEA y que pudo haber derivado en una guerra fratricida entre dos pueblos latinoamericanos. El gobierno de Uribe denunció, basándose en “pruebas” extraídas de Google Earth (!!) la supuesta presencia de 82 campamentos de las FARC y el ELN en territorio venezolano. Como queda en evidencia, la gravedad del asunto constituía una provocación para el pueblo venezolano y su gobierno, especialmente frente a la ausencia de evidencias que le den sustento. Sin embargo, con sólo retroceder unos años en el tiempo es posible encontrar un precedente para este tipo de comportamientos del gobierno colombiano, que en la primera mitad de 2008 esgrimió unas excusas similares para legitimar la violación de territorio ecuatoriano. Al montaje de pruebas ante la OEA por parte de Hoyos -corrupto embajador de Colombia, inhabilitado para ejercer cargos públicos en su país-, se le sumaron las posteriores declaraciones del vocero del Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley que hicieron crecer la alarma: “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino, para luego amenazar con que, si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta”.

Ahora bien, si nos detenemos a reflexionar sobre este accionar del Estado colombiano, veremos que el objetivo subyacente es la instalación de la política del Enemigo Interno en la región. Se trata de una doctrina ampliamente aplicada en Latinoamérica en los '70 y que en la actualidad sigue vigente en Colombia. Sin tener que recurrir a los ejemplos más conocidos de las matanzas cometidas por las dictaduras que asolaron el continente hace ya cuarenta años, los resultados que se

dejan ver en tierras colombianas son aterradores: miles de asesinatos y desapariciones de civiles, principalmente dirigentes populares, sindicalistas, estudiantes, campesinos e indígenas que han alzado la voz frente a las políticas neoliberales del gobierno. En este sentido la contradenuncia del presidente venezolano Hugo Chávez, de que el objetivo del saliente presidente colombiano es exportar el conflicto interno en un intento de desestabilización de la región y de los procesos de cambio que aquí acontecen, es verdaderamente acertada. Mientras Uribe realiza estas provocaciones, en Colombia se está dando una aguda crisis humanitaria, provocada por el terrorismo de Estado, a través de sus fuerzas represivas en alianza indisimulada con grupos paramilitares. Ni la OEA, ni los organismos internacionales de derechos humanos, denuncian con contundencia la responsabilidad política del gobierno colombiano en los “falsos positivos”¹ y la fosa común encontrada a 200 kilómetros al sur de Bogotá, en el pueblo de La Macarena, departamento de Meta. Esta fosa común contendría alrededor de 2.000 cuerpos, siendo la más grande en la historia reciente latinoamericana. Con este luctuoso balance, aunque también con una alta popularidad, cierra Uribe Vélez su segundo periodo al frente del ejecutivo. Su sucesor recibe un legado de servilismo hacia el amo del norte difícil de superar.

Una de las grades incógnitas de la coyuntura es justamente qué curso adoptará el recién asumido gobierno de Santos, tanto en lo relativo al conflicto con las FARC como en lo referente a su política exterior. En este último aspecto las alternativas son, o una “moderación” de la agenda exterior colombiana que reestablezca cierta convivencia, aunque sea temporal, con la República Bolivariana de Venezuela, o la profundización de una estrategia guerrillera y confrontativa de resultados impredecibles.

Santos, un miembro de la oligarquía colombiana, hijo de una de las familias más ricas del país y dueña de varios medios de comunicación, se ha comprometido a continuar con la política de mano dura contra los grupos guerrilleros, que en muchos casos operan en la frontera con Venezuela y Ecuador. El continuismo respecto del proyecto uribista parece evidente, máxime si recordamos que Juan Manuel Santos estaba frente al despacho del Ministerio de la Defensa cuando se produjo la

¹ Se refiere al asesinato por parte de las fuerzas militares de jóvenes de bajos recursos, campesinos y militantes populares, haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en enfrentamiento.

incursión militar colombiana en territorio del Ecuador y la posterior ruptura de relaciones.

Sin embargo, por otro lado, Colombia tiene hoy una de las tasas de desempleo más altas de la región (12,2%), con una informalidad laboral de más del 50%. De un total de 45 millones de habitantes se calcula que 19 millones viven en condiciones de pobreza. A eso debe agregarse una de las principales problemáticas humanitarias de todo el continente: Colombia es, después de Sudán, el segundo país en el mundo con la mayor cantidad de desplazados internos, con cifras que varían entre tres y cuatro millones de personas. El cese de relaciones con Venezuela ha provocado la agudización del desempleo, llevando a un paro casi total de las actividades de los pueblos fronterizos, al extremo de que una de las últimas medidas de Álvaro Uribe fue suspender el cobro del IVA en esta región. Por lo tanto el restablecimiento de las relaciones con el país vecino es importante para la consecución de legitimidad del nuevo gobierno de Santos, por lo menos en sus primeros meses. Este deberá llevar adelante una iniciativa diferente hacia la región latinoamericana, y sobre todo hacia Venezuela, si quiere obtener un mínimo de confianza popular. Esto parece confirmarse con los primeros gestos de Santos luego de la asunción, y con el encuentro del pasado 10 de agosto con Hugo Chávez en Santa Marta, en el que se anunció el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas y una “nueva etapa” en las relaciones bilaterales. Por el momento, el posicionamiento del nuevo mandatario ha sido enfriar las tensiones con su vecino. La guerra abierta parece suspenderse, en esa búsqueda de legitimidad. La difícil coyuntura de fines de julio e inicios de agosto parece calmarse por el momento. Sin embargo, el accionar del imperialismo ha quedado en evidencia, y en su objetivo de bloquear cualquier proceso de cambio en América Latina, de aplastar el avance organizativo de los pueblos, contará seguramente con la colaboración del gobierno de Bogotá.

PARA QUE TENGAN, PARA QUE GUARDEN Y PARA REPARTIR...

Otro epicentro de la política exterior de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, y de su intento de crear una zona de contención a los procesos de cambio, sobre todo al proceso bolivariano, es la ocupación militar de Haití. Dos millones de personas víctimas del sismo del 12 de enero viven actualmente al asecho de la inseguridad alimentaria y bajo la amenaza de una eventual crisis humanitaria durante el periodo

de ciclones que se avecina, mientras EEUU gasta millones de dólares en la militarización de la isla. Esta fuerte arremetida tiene el objetivo también de diezmar la organización del pueblo haitiano y detener las movilizaciones que se han agudizado producto de la catástrofe. Unos diez mil campesinos haitianos se manifestaron el 4 de junio en el Departamento del Centro, denunciando el regalo de 475 toneladas de semillas de maíz, hechas a base de productos químicos que contienen venenos mortales, que la empresa americana Monsanto prometió a Haití a través del proyecto “Winner” de la Usaid (Agencia Americana para el Desarrollo Internacional). En un documento que se hiciera público el mismo 4 de junio, los campesinos haitianos acusaron a Monsanto de ser una “empresa criminal que siembra la muerte sobre toda la faz de la tierra, con los venenos que ésta esparce para desaparecer la cultura campesina”. A fines del mes de marzo del corriente año diferentes gobiernos, organismos multilaterales y empresas transnacionales, prometieron aportes de alrededor de diez millardos de dólares para en un plazo de tres años avanzar en la reconstrucción de Haití. Sin embargo, solamente Brasil y Venezuela cumplieron sus promesas otorgando al fondo fiduciario para la reconstrucción una donación de más de 150 millones de dólares. En tanto, la CIRH (Comisión Internacional para la Reconstrucción de Haití), un organismo mixto (internacional y haitiano), dispone de un mandato de 18 meses y de plenos poderes para gestionar los fondos para la reconstrucción. Este organismo está cada vez más cuestionado por los partidos de oposición y los grupos haitianos organizados que lo consideran como una estructura destinada a reforzar la dependencia del país. Estos grupos denuncian la injerencia de los países, de las personalidades y de las instituciones extranjeras en los asuntos internos de Haití, siendo esto evidente en el proceso electoral y el de la reconstrucción. Por ejemplo, todas las cumbres importantes sobre la reconstrucción se realizan en el exterior del país, con una participación muy baja de nacionales haitianos. Al mismo tiempo, mientras el gobierno de Haití anuncia la reconstrucción de Puerto Príncipe, planeando hacer de la capital una ciudad moderna y atractiva, con centros de negocios, urbanizaciones residenciales, parques, cadenas hoteleras y complejos administrativos públicos, el plan de reubicación, que consistía en el asentamiento de los desplazados en sitios fuera de la capital y en la construcción de viviendas en las comunidades de las víctimas, está lejos de dar los resultados esperados. Una gran cantidad de familias viven aún en sitios públicos, en los establecimientos escolares, en las calles o en carpas que no son resistentes ni al sol ni a la lluvia, mientras que el presidente

René Prével había declarado, a mediados de abril, que la reubicación de la población víctima del siniestro en zonas seguras constituía su principal preocupación y prioridad.

PERSPECTIVAS INMEDIATAS, ESPERANZAS FUTURAS

Por último hay dos procesos electorales, que de aquí a fin de año pueden tener importantes repercusiones. Por un lado las elecciones legislativas del 26 de septiembre en Venezuela. En estas, el chavismo pone en juego su mayoría parlamentaria en un momento donde se viene procesando un conflicto entre sus sectores más radicales y una fuerte burocracia enquistada en el Estado y el PSUV. En un comicio dónde Chávez en persona no es candidato (una elección presidencial hoy lo daría ganador una vez más por amplio margen), y más allá de la enorme debilidad de una oposición fragmentada, es una incógnita como incidirá el descontento popular con esta burocracia, su ineficiencia y corrupción. Recordemos que en las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores el chavismo resignó importantes centros urbanos producto de este descontento.

Pero sin dudas, por su magnitud e incidencia regional, las elecciones presidenciales del 3 de octubre próximo en Brasil serán el hecho político más relevante del semestre. Los últimos sondeos pre- electorales, tanto la encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) como el de la consultora Vox Populi, marcaron una nueva tendencia en la carrera electoral, mostrando una ventaja de la candidata del PT Dilma Rousseff con 40%, sobre el 35% de Serra, candidato opositor, y gobernador socialdemócrata de Sao Paulo. La candidata oficial ha dicho que continuará llevando adelante las políticas del gobierno actual. En el ámbito de la política interna esto significa la perpetuación de un modelo económico con elementos de fuerte ortodoxia neoliberal, basado en salarios bajos y una enorme desigualdad social, al que se la ha añadido una política asistencialista en gran escala que ha logrado reducir los índices de pobreza e indigencia, e impulsar el consumo. En el mapa regional el resultado de esta elección puede tener múltiples consecuencias. Los países del ALBA, en particular Venezuela, tienen motivos geopolíticos para desear una continuidad petista en el Planalto. En su rol de potencia regional, que describimos más arriba, Brasil ha jugado en general como aliado defensivo de países como Venezuela y Bolivia frente a los intentos mas

descarnados de injerencia norteamericana en Sudamérica. Más allá de que en la profundización de estas experiencias populares no cabe esperar la más mínima simpatía por parte de un partido como el PT, que ha abandonado toda perspectiva de cambio social, el triunfo de la oposición socialdemócrata podría derivar en un mayor aislamiento de los procesos mas radicales.

Como sea, es en la articulación de los movimientos sociales del continente, en la unidad de los pueblos de Nuestra América, que reside la esperanza. Hoy, la hegemonía continental se sigue ejerciendo desde arriba, pero la bandera del ALBA levantada consecuentemente por Cuba, Venezuela y Bolivia plantea una oportunidad histórica para hacer realidad el sueño bolivariano. La articulación de movimientos sociales que se expresa alrededor de ese proceso, encabezada por el MST de Brasil y otros movimientos del continente, es un dato alentador y una apuesta hacia el futuro de todos los que luchamos por la emancipación social. Se avanzó un poco, y falta mucho. Llegamos ya al siglo XXI, todavía dominados, pero también luchando en unidad por una América libre y socialista.